

so del Estado en 26 de Junio último.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de la sentencia relativa; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CO. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias, M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José S. Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio Altamirano.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José G. Ramirez.—L. M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 30 de 1874.—*E. Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Lic. Bernardo Ponce Font, como defensor de Ignacio Contreras y Leonido Casanova, contra el C. Pedro Ortega Polanco, que figura como Gefe político de Acanech, y juzga á Contreras y Casanova, por la ley de 3 de Mayo de 1873.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En el escrito que motiva este juicio, el Lic. D. Bernardo Ponce Font, pidió, que V. se sirviera amparar á los reos de homicidio Ignacio Contreras y Leonido Casanova, de quienes es defensor, contra los actos del Gefe político de Acanech que los estaba juzgando conforme á la ley general de salteadores y plagiarios, que ni es constitucional, por haber sido expedida, en sentir del actor, contra el art. 13 del Código fundamental de la República, ni aplicable á sus defendidos, porque en el sentido legal y aun gra-

matical de la palabra, no puede considerárseles culpables del delito de asalto, como lo comprendió el Juez de 1ª instancia del crimen de esta Capital que instruyó y sentenció la causa abierta contra ellos por homicidio.

Resuelto el punto previamente intentado acerca de la suspensión de dicho procedimiento, la presunta autoridad responsable rindió su informe sobre lo principal del recurso, contrayéndose en él á demostrar la procedencia de su jurisdicción, con el argumento de que fué reconocida por el mismo defensor, con el hecho de haber aceptado este encargo que le confirió la propia autoridad informante, y con la razon, que es mas bien una excusa, de que el H. Tribunal Superior de Justicia se declaró incompetente para conocer de la causa respectiva.

En tal estado el juicio, los reos, á cuyo favor lo intentó el Sr. Lic. Ponce, presentaron á V. un segundo ocurso en que reproduciendo los fundamentos en que se apoya aquel como defensor suyo, alegan que el que los juzga no es tal Gefe político, por falta de autoridad del Lic. D. Miguel Castellanos Sanchez que lo nombró para aquel destino, y por el mismo defecto del que, titulándose Tribunal Superior de Justicia del Estado, hizo la declaracion de su incompetencia, que ha dado lugar á que el procedimiento se siga con sugesion á la citada ley de 3 de Mayo.

El Fiscal, despues de haber procurado examinar con el acierto debido, las razones en que se apoyan ambos escritos, ha deducido en conclusion, que el amparo solicitado, si se fundara solamente en las del primero, no debería concederse; porque si bien es cierto que el art. 13 de la Constitucion federal, garantiza, que en la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, cierto tambien es, que el art. 29 del mismo Código político de la Nacion, permite que en los casos de invasion, perturbacion grave de la paz pública, ó cualesquiera otros que pon-

gan á la sociedad en grande peligro ó conflicto, puede suspender el Presidente de la República las garantías otorgadas en la misma Constitución, siempre que sea de acuerdo con el consejo de Ministros y aprobación del Congreso de la Unión. Y si el Presidente pudo, con los requisitos expresados, expedir dicha ley, con mayor fuerza de razón ha tenido facultad de expedirla la soberana Asamblea Nacional, que hizo en este caso un deber de su poder, á causa de la multitud de bandoleros que pueblan los caminos en varios Estados y de la audacia de los plagiarios que en el corazón mismo de las Ciudades, penetraban á ejercer sus depredaciones. Pero si el fiscal juzga que por estos motivos no es procedente el amparo por violación del citado art. 13 de la Constitución en los quejosos, opina que sí procede á su favor, ya porque el homicidio que cometieron no es comprendido entre los delitos que deben ser juzgados y sentenciados conforme á la repetida ley de 3 de Mayo, como lo hace presumir la circunstancia de haber sido fallado el proceso en juicio ordinario, por el Juez respectivo de 1ª instancia, ó ya porque, y esto es lo mas indudable, ni el Tribunal Superior que se declaró incompetente para conocer en 2ª instancia, tiene autoridad alguna para hacer tal declaración, en virtud de la nulidad de su título, públicamente reconocida, y acerca de la cual ya este mismo Juzgado concedió un amparo que obtuvo la confirmación de la Suprema Corte de Justicia; el titulado Gefe político de Acanech, D. Pedro Ortega Polanco, deriva su autoridad para que pudiera ser competente en el caso de que se trata, de un Gobernador legítimo, pues es un hecho, que pertenece al dominio del público y á la autoridad de la cosa juzgada, que la minoría del Congreso del Estado que inició los actos preparatorios de la exaltación al poder de sus favorecidos, tanto en el orden judicial como en el administrativo, hasta haberlos dejado en sus respectivos puestos bajo la protección de las fuerzas

federales, es un hecho indiscutible, repite el fiscal, que esa minoría no formaba en tonces, como hoy tampoco forma Congreso para ejercer las funciones propias y constitucionales de la verdadera Legislatura del Estado.

Bajo este punto de vista, el amparo procede, por violación de la garantía otorgada en el art. 16 de la Constitución general, con cuyo fundamento, con el del 101 del propio Código político de la República, y 1ª, fracción 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el fiscal pide á vd. conceda dicho recurso á los individuos Ignacio Contreras y Leonido Casanova, que lo han solicitado en el presente juicio; pero solo contra los actos de D. Pedro Ortega Polanco, que los ha juzgado y sentenciado como Gefe político, y no contra las demas autoridades que mencionan en la parte petitoria de su escrito los quejosos, por no aparecer ejecutora ninguna de ellas, del acto reclamado.

Lo pedido por el fiscal hasta aquí, es en el concepto de que los expresados Casanova y Contreras ratifiquen el anterior ocurso que dice José Avila haber firmado á ruego de ellos, y cuya formalidad, suplico á vd. mande llenar.

Mérida, Setiembre 5 de 1874.—*P. Hijuelos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Setiembre 5 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Bernardo Ponce, defensor de Ignacio Contreras y Leonido Casanova, contra el Gefe político de Acanech, que juzga á sus defendidos conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873, con infracción de los arts. 13 y 16 constitucionales. Visto el auto en que se suspendió el acto reclamado; lo informado por el Gefe político de Acanech; el pedimento fiscal; la citación para sentencia, con cuanto mas ver y tener presente convino.

Considerando: Que aunque el decreto de

3 de Mayo de 1873, prorogado por un año mas por el de 10 de Abril del corriente, se alega que es anticonstitucional, porque viola el art. 13 de la Constitución federal, estableciendo tribunales especiales; esa razon carece de fundamento, así porque el art. 29 permite la suspension de garantías, con excepcion de la de la vida, respecto de delitos políticos, puesto que el saltador de caminos no está exceptuado de la pena de muerte por el art. 23; y no prohibiendo, ademas, ningun artículo constitucional la suspension de garantías, claro es que están bien suspendidas las de los arts. 13, 16, 19, 20 y 21 del Código fundamental, en la ley de saltadores y plagarios de que se trata.

Considerando: Que habiendo acontecido el hecho punible de Contreras y Casanova el 21 de Junio de 1873, la justicia ordinaria les inició causa por robo y homicidio, cuya causa se falló en primera instancia; pero en segunda, el que fungo como Tribunal Superior de Justicia, se declaró incompetente, consignando á los reos al Gefe político de Acanech, cuyos agentes fueron los aprehensores; de suerte, que despues de un año de la aprehension se abrió el juicio sumario á los quejosos, como no aprehendidos infraganti delito, contra el tenor del art. 82 de la citada ley de 3 de Mayo del año próximo pasado, que previene, que solo dure el proceso de los saltadores, no cogidos infraganti, quince dias; por lo que no es aplicable al presente caso dicha ley de plagarios.

Considerando: Que ademas de lo expuesto, el Gefe político de Acanech, deriyando su autoridad del Sr. Lic. D. Miguel Castellanos Sanchez, que en su calidad de Gobernador del Estado carece de autoridad legítima, tampoco la puede tener aquel funcionario, quien por consiguiente carece así mismo de competencia constitucional; y viola, así por estas razones como por las expresadas en el anterior considerando, el art. 16 del Pacto fundamental de la República, haciendo procedente el amparo.

Por estos legales fundamentos, de confor

midad con el parecer fiscal, fundado en el referido art. 16 constitucional, en el 101 y frac. 1º, art. 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla:

1º: La Justicia de la Union ampara y protege á Ignacio Contreras y Leonido Casanova, contra el Gefe político de Acanech, que sin comprenderles la ley de 3 de Mayo y sin tener autoridad legítima, los juzga conforme á ella, con violacion del art. 16 constitucional.

2º: Sáquese testimonio de este fallo para publicar y elévense los autos en revision á la Corte Suprema de Justicia nacional, con arriglo á los arts. 13 y 27 de la citada ley orgánica.

Hágase saber.—Mérida, Setiembre 5 de 1874.—*J. Manzanilla*.—Ante mí.—*José Anacleto Castillo*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 9 de 1874.— Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatán, por el C. Lic. Bernardo Ponce Font, como defensor de Ignacio Contreras y Leonido Casanova, contra el C. Pedro Ortega Polanco, que figura como Gefe político de Acanech y juzga á Contreras y Casanova por la ley de 3 de Mayo de 1873, vulnerando en sus personas las garantías á que se refieren los arts. 13 y 16 de la Constitución general, y

Considerando: Que aunque se alega que el decreto de 3 de Mayo de 1873 es anticonstitucional como contrario al art. 13 de la Constitución federal, estableciendo ese decreto tribunales especiales; tal alegato no es fundado, porque el art. 29 de la misma Constitución faculta para decretar la suspension de garantías en ciertos casos; exceptuando la relativa á pena capital por delitos políticos.

Que el art. 23 no exceptua de ella á reos de asalto en los caminos.

Que la de no establecer tribunales especiales para tales casos, ha podido por lo mismo ser suspensa, y de consiguiente que no procede el amparo en el caso de que se trata, respecto del art. 13 constitucional.

Considerando: Que el delito porque se juzga á Contreras y Casanova, verificado en 21 de Junio de 1873, la justicia ordinaria les inició causa por robo y homicidio, cuya causa se falló en 1ª instancia, y en 2ª el Tribunal considerado como de tal 2ª instancia, se declaró incompetente y consignó los acusados al Gefe político de Acanceh, y después de un año de la aprehension se abrió el juicio contra ellos, por dicho Gefe político, contra el tenor del art. 3º de la misma ley, que dispone que el proceso de los reos de plagio y asalto no aprehendidos *infra-ganti* concluya dentro de quince dias, por lo que no es aplicable al caso la ley citada; y considerando, además: Que el Gefe político de Acanceh ejerce funciones de Gefe político, derivando su autoridad del C. Miguel Castellanos, en calidad de Gobernador del Estado, careciendo de ese carácter, y por lo mismo no ha podido darla á aquel, por lo que ejerciendo aquellas funciones, vulnera, al juzgar á Contreras y á Casanova, la garantía á que se refiere el art. 16 de la Constitución general.

Por lo expuesto, y de conformidad con el art. 101 de la misma Constitución, se decreta:

Que se confirma por sus propios fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 5 de Setiembre último, por el Juzgado de Distrito de Yucatán, que declara:

Que la Justicia de la Union ampara y protege á Ignacio Contreras y Leonido Casanova, contra el Gefe político de Acanceh, que sin comprenderles la ley de 2 de Mayo y sin tener autoridad legítima, los juzga conforme á ella, con violacion del art. 16 constitucional.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 18 de Noviembre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, por el C. Domingo Pliego, contra el C. Presidente municipal de Pachuca, que ha ordenado al quejoso satisfaga \$ 21 de multa por tener un horno en su casa y que proceda á su demolicion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal que suscribe, alegando en el juicio de amparo promovido por el C. Domingo Pliego contra el C. Presidente municipal de Pachuca, dice: que el acto ó procedimiento que el quejoso ha reclamado y por el que en su concepto se viola la garantía que otorga el art. 4º de la Constitución federal, es el contenido en la orden escrita que acompañó á su primer ocurso, y en la que se le previene que enterara una multa de \$ 25, y procediese á la demolicion de un horno para fabricar pan que tiene en la casa de comercio que gira, y esto por la causal